

LA INSURRECCION MILITAR DEL QUINCE DE OCTUBRE

El quince de octubre a las ocho y treinta de la mañana se levantaban simultáneamente todos los cuarteles de la Fuerza Armada y deponían al Presidente Romero con todo su régimen. Fue una insurrección militar promovida y realizada por militares jóvenes que lograron convencer a casi toda la oficialidad joven de que el país y la Fuerza Armada no podían tolerar por más tiempo un régimen de represión, corrupción e ineptitud como el del Presidente Romero. Tras una semana de deliberaciones y alianzas se pudo establecer una Junta Revolucionaria de Gobierno, compuesta por dos militares y tres civiles y un nuevo Gabinete. El proceso ha merecido hasta ahora el silencio de la oligarquía, el apoyo de las fuerzas progresistas en un amplio espectro que va desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista y el rechazo violento de las llamadas organizaciones populares y de los grupos guerrilleros.

Para entender esta insurrección militar hay que partir de lo que decíamos en el editorial anterior, escrito un mes antes del levantamiento y que, sin embargo, mantiene su vigencia. La situación política de El Salvador era insostenible y caminaba hacia la guerra civil, una guerra civil en la que el Gobierno y la oligarquía tenían todas las de ganar porque su fuerza militar y su fuerza económica eran incomparablemente mayores que la fuerza militar y económica de las organizaciones populares y de los grupos guerrilleros. Con toda probabilidad, además de un número crecido de víctimas, esto hubiera recrudecido el estado de represión, postergando toda posibilidad de cambio y haciendo cada vez más difícil y costosa, en términos de dolor y de vidas humanas, la siguiente insurrección popular.

En vez de esto tenemos hoy una insurrección militar. Ciertamente una insurrección militar no es lo mismo que una insurrección popular, ni siquiera cuando la insurrección militar está programada y realizada por jóvenes militares de origen popular y que todavía no habían entrado al servicio directo de la oligarquía y de un Gobierno corrupto y represor. La cosa es evidente desde muchos puntos de vista, pero de eso no se sigue que la insurrección militar sea contraria a los intereses populares.



Y es que según la evidencia disponible la insurrección militar no surgió directa e inmediatamente de un plan de los Estados Unidos, ni del capitalismo progresista, ni siquiera de los partidos políticos de oposición. Una vez ocurrida es claro que todas estas fuerzas se dedicarán a sacar del suceso el máximo provecho para sus intereses particulares. Pero los hechos, más verdaderos y radicales que cualquier teoría o dogma preestablecido, es que la insurrección militar sale de la combinación de dos factores: un empeoramiento hasta extremos insoportables de la situación económica, de la situación social y de la situación política (factor objetivo) y una persuasión en la joven oficialidad de que tal situación no sólo llevaba a un callejón sin salida, sino al descrédito total de la institución militar. Es un suceso, que aunque tiene fuertes determinaciones estructurales tiene también una alta dosis coyuntural. Y dependerá de cómo se juegue —cómo jueguen las distintas fuerzas sociales— esa combinación de determinaciones estructurales y de indeterminación coyuntural para que el proceso termine en uno u otro lugar.

Por lo pronto el proceso ha dado de sí una Proclama más que aceptable, una Junta Revolucionaria de Gobierno con posibilidades en favor de un profundo reformismo, un Gabinete en el que predominan hombres progresistas, capaces, honestos y decididos a propiciar profundos cambios sociales. Las nuevas autoridades han prometido, entre otras cosas, el cese de la represión y de los procedimientos ilegales, la supresión de ORDEN, la legalización de las organizaciones populares y de partidos de cualquier ideología, el más escrupuloso respeto de los derechos humanos; ha prometido también el inicio de medidas de cambio estructural, citando especialmente el problema de la reforma agraria.

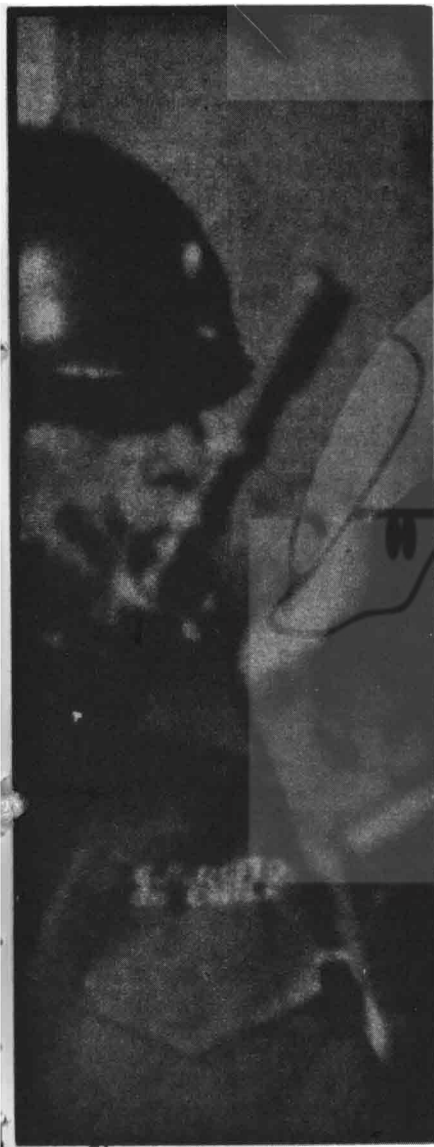


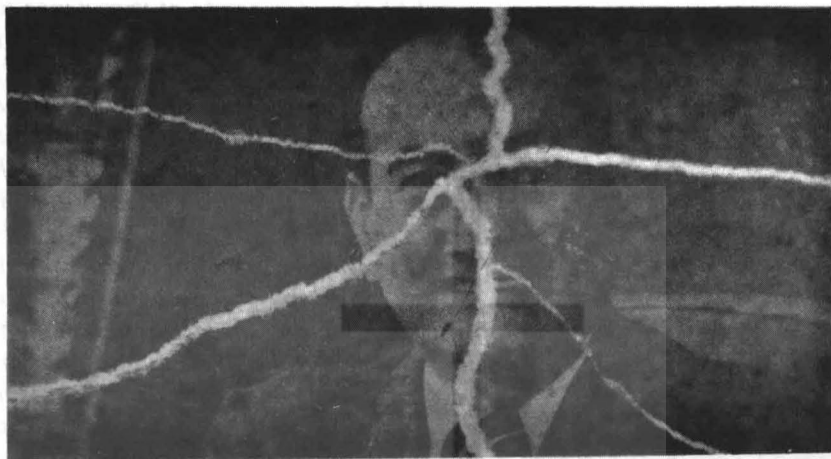
El haber derrocado al Presidente Romero y a toda su camarilla agazapada en el Ejecutivo, en el Legislativo y en el Poder Judicial; el haber limpiado los altos puestos de mando de la Fuerza Armada de sus corruptos ocupantes y el haber dado de baja o pasado a situación de disponibilidad a más de cincuenta militares de alta gradación, y haberlo hecho con poco costo de violencia, es un logro de gran importancia. Y lo es también haberse comprometido a los puntos anunciados en la Proclama (cfr. el texto en la sección de documentación).

Y, sin embargo, no todo es claro en el panorama. Las represiones habidas en la primera semana después de la insurrección mostraron que hay mucho que sanear en la Fuerza Armada y en los cuerpos de seguridad. Asimismo las dificultades que parece haber no para dar con los presos políticos y desaparecidos, que según todas las probabilidades fueron asesinados por el régimen anterior, sino incluso para deducir responsabilidades, impiden dar un voto de total confianza a la Fuerza Armada, como impulsadora o, al menos, como garantizadora de un saneamiento profundo de las estructuras del país. Ahora bien, si ha de haber cambios profundos, si ha de romperse la estructura de dominación que oprime y reprime a la mayoría del pueblo salvadoreño, esto no puede hacerse sin una fuerza que se oponga seriamente a la fuerza de la oligarquía. Experiencias pasadas, como la de la Transformación Agraria, demuestran que el dinero, la corrupción, la propaganda pueden hacer cambiar decisiones y promesas militares. La situación es ahora distinta, pero no por ello sin ambigüedades. Se necesita una Fuerza Armada limpia, que rompa todas sus ataduras con el pasado para poder romper con lo que es la causa última de la situación del país: el conjunto de sus estructuras económicas.

Y si el ataque contra el nuevo régimen no es frontal, no por eso dejará de darse. Por un lado, se va a hablar de comunismo y, por otro, se va a procurar que el capitalismo progresista hegemonice el proceso. Son dos embestidas que pueden hacer mucho daño al impulso renovador de la juventud militar. Aquí es donde se puede esperar la intromisión de los intereses capitalistas internos y externos, sobre todo a través de los préstamos y ayudas internacionales.

Otro de los puntos oscuros es la resistencia de las organizaciones populares y el hostigamiento que han emprendido contra el nuevo régimen. Las organizaciones populares no son de modo alguno el pueblo, todo el pueblo, pero sí son una de sus representaciones más dinámicas y más combativas. Si las organizaciones populares incluso desde la oposición, favorecieran decididamente cuantas medidas emprendiera el Gobierno en pro de las mayorías populares; si empujaran al Gobierno a irse radicalizando paulatinamente, podrían contribuir grandemente a superar los peligros del reformismo anti-revolucionario. Si, al contrario, todo su esfuerzo va a debilitar al actual régimen y a hacer difícil





su ya difícilísima acción de Gobierno, veremos al actual Gabinete y las fuerzas que le respaldan, sometidos al fuego cruzado de la oligarquía y de las organizaciones, con resultados inmediatos positivos para la oligarquía y nocivos para el pueblo y aun para las organizaciones populares. Estas podrían sacar mucho provecho para ellas del cese de la represión y de su legalización y, lo que es más importante, podrían sacar mucho provecho para el pueblo. Un gran apoyo popular, respaldado por una Fuerza Armada en que tuviera gran peso la juventud militar, podría abrir grandes perspectivas al proceso.

No es que a los actuales dirigentes les falte apoyo popular. Ya ahora tienen tras de sí a un amplio espectro de partidos y de sindicatos. Pero pueden ganarlo mucho mayor, en cuanto pongan en marcha sus promesas y sus proyectos; en cuanto se pongan a gobernar de cara al pueblo. Pronto se podrá notar un nuevo ambiente liberador de la pesadilla opresora en que ha vivido el país, pronto se notarán los efectos de una gran mejora en la administración del Estado, pronto se notarán medidas que hagan sentir al pueblo cómo ha entrado en otra época.

Sería prematuro dar juicios definitivos sobre este proceso que acaba de comenzar. No es prematuro decir que el país como conjunto cuenta hoy con posibilidades con las que no contaba el quince de octubre. Todo va a depender de cómo jueguen las distintas fuerzas sociales y si se va a conseguir o no la unidad, aunque fuera sólo táctica, de las fuerzas sociales progresistas. Menos que nadie tienen que perder las organizaciones populares, a no ser que se empeñen en análisis falsos y en acciones cuyo resultado sería invalidar las posibilidades mejores del proceso en beneficio de una situación, en la que la represión, la violación de los derechos humanos, la explotación de las mayorías y la guerra civil volvieran a ser las características esenciales del país.

27-octubre-1979.